

elEconomista

Viernes, 2 de junio de 2006

LA ADMINISTRACIÓN SE LAVA LAS MANOS

MANUEL PARDOS

Asistimos al más grave escándalo financiero de la historia reciente de España, en el que 400.000 familias ven en peligro sus ahorros tras confiarlos a empresas de apariencia solvente que incluso emplearon el aval de grandes entidades financieras en la captación de clientes.

Lo primero que debe buscarse es que paguen las empresas y los responsables y todos sus cómplices y colaboradores, aunque las actuales perspectivas apuntan a la recuperación de sólo una parte del dinero aportado por los ahorradores. Así las cosas, ¿es el Estado el

culpable de lo sucedido en el llamado caso de la filatelia? La respuesta es clara, al menos en términos penales. La culpabilidad corresponde a los responsables de Fórum y Afinsa, y a los cómplices y cooperadores del delito que la Audiencia Nacional determine. Por ello, la investigación judicial resulta vital, no sólo en la perspectiva de depuración de responsabilidades para los afectados y para todos los españoles, sino en la de averiguación de las cantidades defraudadas y los patrimonios de implicados y colaboradores como fórmulas de recuperación de dinero a favor de los perjudicados. Es evidente que pese a las denuncias de Adicae (www.adicae.net), el Estado -a través del Ministerio de Economía y los reguladores financieros- no ha tomado las medidas necesarias y exigibles en su obligación de pro-

teger el ahorro de 400.000 familias. Además, a pesar de los indicios de riesgo en el sector, el Estado se ha mantenido inoperante y errático. Y el empeño en no reconocer a las inversiones realizadas su naturaleza financiera, reconocida por jueces, fiscales y la Agencia Tributaria, demuestra la existencia de un grave fallo en nuestro Estado de Derecho. La ausencia de regulación y su no supervisión por el Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Seguros (DGS), organismos adecuados y capacitados para ello (en absoluto el Ministerio de Sanidad y Consumo y menos todavía las comunidades autónomas), origina en sí misma una responsabilidad. La propuesta de Adicae es clara: la creación de un Fondo Asistencial para paliar los problemas inmediatos de miles de familias, pero también

el anuncio de un Fondo de Compensación de Pérdidas a implementar en el momento en que éstas puedan ser cuantificadas por las autoridades judiciales. Ésta es la solución que quiere Adicae, puesto que la exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado es una vía compleja, farragosa e incierta, aunque no dudaremos en mantenerla mientras no se arbitren las soluciones propuestas.

Adicae y el Consejo de Consumidores y Usuarios (del que forma parte) no han dejado de destacar la necesidad de una actuación conjunta. Procesos judiciales en los que intervengan más de 1.000 acusaciones generarían una ralentización indeseable, cuando no su inviabilidad material. Ésta es la realidad, por más que grupos de antiguos captadores del dinero de los afectados, organizaciones sospe-

chosas de todo como Ausbanc o abogados de poca ética y deontología profesional se empeñen por confundir y deteriorar este proceso con sus ruidos y calumnias hacia las asociaciones de consumidores. Por este motivo Adicae, que ha puesto desde el primer momento sus equipos jurídicos a disposición de todas las plataformas y agrupaciones de afectados que lo considerasen conveniente para avanzar hacia una actuación unitaria, ya aglutina en su plataforma a más de 40.000 personas, aunque esta cifra no cesa de crecer a través de los teléfonos y oficinas de Adicae en toda España, y la página web que, 24 horas después del estallido del problema, ya habíamos creado (www.afectadosfilatelia.org).

○ Presidente de Adicae (Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros).